

# *Sistema político y actitudes sociales en la legitimación de la dictadura militar argentina (1976-1983)*

*Daniel Lvovich*

Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET

*Resumen:* Este artículo aborda la problemática de los apoyos sociales y modos de legitimación que obtuvo la dictadura militar instaurada en 1976 en la Argentina. Para ello, considera las tradiciones previas sobre las que se asentó y el modo en que el escenario político de los años previos al golpe militar condicionó las lecturas de su advenimiento. Da cuenta, asimismo, de las características del sistema político argentino que explican la legitimidad obtenida por el régimen entre los principales partidos políticos, e intenta dar cuenta de algunas claves interpretativas que explican el apoyo obtenido por la dictadura entre sectores considerables de la población argentina.

*Palabras clave:* Argentina, dictadura, sistema político, actitudes sociales.

*Abstract:* This article addresses the problem of social supports and means of legitimizing the military dictatorship that was established in 1976 in Argentina. In order to do so, it analyzes the previous traditions on which the dictatorship settled and how the political scene in the years before the military coup conditioned further readings. It also gives an account of the characteristics of the Argentine political system to explain the legitimacy gained by the regime between the major political parties and attempts to account for some clues to explain the interpretative support for the dictatorship between significant sectors of the Argentine population.

*Key words:* Argentina, dictatorship, political system, social attitudes.

La última dictadura militar que gobernó la Argentina es, en la actualidad, repudiada de manera casi unánime. La memoria de los horrores del terrorismo de Estado constituye, afortunadamente, uno de

los sustentos de la actual democracia argentina. Sin embargo, tal como ha ocurrido en otros países que atravesaron situaciones traumáticas, dicha memoria se sostiene sobre una representación complaciente del pasado, en el sentido de considerar que el conjunto de la sociedad fue víctima de un régimen que no contó con más apoyo que el de las Fuerzas Armadas, el sector más concentrado del poder económico y la mayor parte de la cúpula eclesiástica, y que no gozó jamás de legitimidad alguna. Sin embargo, el aporte de la historiografía y el de otras ciencias sociales permite revisar esa imagen, planteando en cambio que el llamado *Proceso de Reorganización Nacional* contó con sustanciales apoyos, y que determinadas características del efectivo funcionamiento del sistema político argentino otorgaron al régimen dictatorial formas de legitimación que perduraron hasta la crisis abierta tras la derrota en la guerra de las Malvinas. Nada de ello implica, naturalmente, desconocer o relativizar los procesos de victimización a los que una parte importante de la sociedad fue sometida en la etapa dictatorial<sup>1</sup>.

En este trabajo intentaremos dar cuenta, a través de la revisión de la bibliografía, de las formas que adoptaron esos apoyos sociales y políticos a la dictadura. No pretendemos con ello juzgar a los actores de aquel pasado, sino ayudar a la comprensión del fenómeno dictatorial. No creemos que sea pertinente referirnos a culpas colectivas, ya que nuestro análisis no se centra en la responsabilidad de los criminales —muchos de los cuales cumplen condenas o son actualmente juzgados—, sino en el análisis de aquellos sectores de la sociedad argentina y de determinadas características de sus tradiciones políticas que posibilitaron o toleraron la instauración de la dictadura, en ocasiones por motivos opuestos a los objetivos de la coalición golpista.

## La dictadura militar y la tradición autoritaria

El régimen militar que se instauró en Argentina el 24 de marzo de 1976 y perduró en el poder hasta fines de 1983 desarrolló un terrorismo estatal de una ferocidad inaudita, que dejó un trágico saldo de asesinados y *desaparecidos* entre sus consecuencias más conocidas y visibles. También produjo un vasto proceso de reestructuración social

---

<sup>1</sup> Este trabajo se redactó en el marco de una estancia de investigación postdoctoral en la Universitat de València, posibilitada por una beca de la Fundación Carolina.

regresiva, a través de políticas que favorecieron una desindustrialización selectiva, una considerable disminución del poder adquisitivo de los asalariados, un incremento desmesurado de la deuda externa pública y un marcado proceso de concentración económica, en el contexto de un ciclo de acumulación caracterizado por la hegemonía del capital financiero y de los grandes grupos económicos de capital argentino o transnacional, en particular los que desarrollaron estrategias de inversión integradas y diversificadas<sup>2</sup>.

En la explicación de los orígenes de la dictadura confluyen diversos factores. En el medio plazo, se destaca la incapacidad para construir un orden político estable y legítimo tras la caída del peronismo en 1955, derivada del comportamiento de los principales actores sociales y políticos motivados por la lógica de un empate entre fuerzas, capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de modo perdurable, los propios. Tal imposibilidad, expresada en el sucesivo fracaso o inestabilidad de las distintas fórmulas políticas ensayadas durante dos décadas —sea para excluir o para integrar paulatinamente al peronismo en el sistema político— se articuló en lo económico con una modalidad específica de acumulación de capital en la Argentina, basada en una situación de poder económico compartido que se desplazaba alternativamente entre la burguesía agraria pampeana y las distintas fracciones del capital industrial, lo que motivó una situación de «imposibilidad hegemónica» dadas las dificultades estructurales para elaborar una coalición entre dichos sectores. Con el regreso del peronismo al poder en 1973 no se lograron romper las bases sociales y políticas del empate, y tras la muerte de Perón en 1974, sometidas a un fuerte proceso de polarización, las fuerzas sociales en pugna lograrán vaciar al Estado de contenido, provocando que el gobierno, disuelto en las determinaciones de la sociedad, se derrumbe en marzo de 1976<sup>3</sup>.

Las explicaciones de corto plazo destacan específicamente el proceso del deterioro del gobierno peronista (1973-1976), en particular cuando fue encabezado por María Estela Martínez de Perón, tras la

---

<sup>2</sup> El terrorismo de Estado está documentado en *Nunca más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984. Sobre la economía del periodo y sus consecuencias, BASUALDO, E.: *Estudios de historia económica argentina*, Buenos Aires, siglo XXI, 2006.

<sup>3</sup> PORTANTIERO, J. C., «Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973», *Revista Mexicana de Sociología*, XXXIX, 2 (1977).

muerte de Juan Perón. Tras el efímero éxito del acuerdo social impulsado por Perón y su ministro de Economía José Gelbard —que logró una importante expansión de la actividad económica y llevó a records históricos el nivel de la producción industrial—, el escenario económico se ensombreció ante el renacer de la puja distributiva, la caída de la inversión privada, el impacto del *shock* petrolero de 1973 y un deterioro de los términos de intercambio del 25 por 100 entre ese año y 1975, conjunto de factores que determinaron el regreso de una inflación desenfrenada. A este escenario se sumó, tras el fallecimiento de Juan Perón, la exacerbación del conflicto político y, en concreto, de sus manifestaciones más violentas, desarrolladas tanto por los grupos paramilitares y paraestatales de la extrema derecha como por las organizaciones político-militares de la izquierda marxista y peronista, que, si bien habían contado con un significativo apoyo social hasta 1973, transitaban en los años anteriores al golpe de Estado por un progresivo proceso de aislamiento social y de subordinación de sus estrategias políticas a las militares. Si en este camino —que incluyó el desarrollo de un foco guerrillero en la provincia de Tucumán por el Ejército Revolucionario del Pueblo— estas organizaciones buscaban un enfrentamiento abierto con el gobierno y las Fuerzas Armadas que permitiera desenmascarar la naturaleza represiva del régimen, el resultado fue una contundente derrota militar, que diezmó a los grupos revolucionarios incluso antes de 1976, y una creciente influencia militar en el gobierno de Isabel Perón, que perdía simultáneamente buena parte de sus apoyos sociales.

Mientras el gobierno apelaba cada vez más a los mecanismos represivos y de censura, en junio de 1975, su ministro de Economía Celestino Rodrigo intentó desarrollar un paquete de medidas que combinaban una devaluación del 160 por 100 y un aumento de las tarifas energéticas con un tope a los aumentos salariales, que fue resistido por los propios sindicatos peronistas, que obtuvieron grandes incrementos salariales en el sector público y privado. Se abrió entonces un periodo de altísima inflación —que a fines de año alcanzó el 183 por 100— acompañado de prácticas especulativas, la ampliación del déficit fiscal, caída de las reservas y acumulación de saldos comerciales negativos<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> ARONSKIND, R.: «El país del desarrollo posible», en JAMES, D. (dir.): *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, t. IX de la *Nueva Historia Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, pp. 108–110.

Se trató de una coyuntura económica excepcionalmente grave, resultado de la combinación de políticas incongruentes, fuertes presiones sectoriales contradictorias, un poder ejecutivo débil y la presencia de agentes económicos desestabilizadores<sup>5</sup>. Este conjunto de circunstancias provocó un proceso precipitado de desgaste y deslegitimación de un gobierno sin capacidad alguna para resolver las múltiples crisis a las que se enfrentaba y que, no pocas veces, provocaba. Frente a ello, todos los intentos de salida institucional de una situación caracterizada como caótica fracasaron.

Las Fuerzas Armadas, imbuidas desde una década atrás de la *Doctrina de la Seguridad Nacional* que sustentaba la idea de guerra contra el enemigo interno como su pilar, no encontraron demasiadas resistencias para derrocar a un gobierno del que, previamente, se habían convertido en su casi exclusiva base de sustentación. Este conjunto de explicaciones se revelaría incompleto si no se atendiera además a las circunstancias internacionales, dado que el golpe militar de 1976 en Argentina se insertó en un ciclo dictatorial que abarcó la casi totalidad de los países sudamericanos en el periodo. En tal sentido, resulta indudable la influencia del gobierno de los Estados Unidos que, en algunos casos —como el de Chile en 1973—, impulsó decididamente la intervención militar y en otros al menos las apoyó y respaldó.

Los proyectos golpistas no eran improvisados. Desde 1973, el llamado «Grupo Azcuénaga» liderado por el abogado conservador Jaime Peirraux había desarrollado la tarea de aunar voluntades para un golpe militar que debía distinguirse de los anteriores en sus objetivos: se trataba ahora de reorganizar el país en sus estructuras básicas sociales, políticas, económicas y culturales. De los encuentros propi-

---

<sup>5</sup> La literatura económica más reciente ha matizado fuertemente la hipótesis del agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, aun admitiendo la gravedad de la crisis que atravesaba ese modo de acumulación. Mario Damill ha señalado en tal sentido que entre 1964 y 1974 el PBI argentino creció a una tasa promedio del 4,5 por 100 anual, basado fundamentalmente en el ahorro interno y en una inversión anual de 20 puntos del PBI. En el periodo, la economía se expandió sin enfrentar graves crisis en la balanza de pagos, y las exportaciones industriales pasaron del 3 por 100 del total en 1960 al 24 por 100 en 1975. En contrapartida, los principales problemas se encontraban en el plano fiscal, derivados de las formas de financiamiento de la acumulación que caracterizaban al modelo sustitutivo. DAMILL, M.: «La economía y la política económica: del viejo al nuevo endeudamiento», en SURIANO, J. (dir.): *Dictadura y democracia (1976-2001)*, t. X de la *Nueva Historia Argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 164-165.

ciados por Perriau participaron militares, banqueros, empresarios industriales y agropecuarios, intelectuales y profesionales. Entre ellos se contaban José Alfredo Martínez de Hoz (ministro de Economía de Videla), Juan José Catalán (secretario de Cultura) y Mario Cadenas Madariaga y Jorge Zorreguieta (ambos secretarios de Agricultura de Martínez de Hoz)<sup>6</sup>. La influencia de este grupo será notable en un gobierno que tuvo como objetivo primordial la disciplina social, lo que implicó a la vez una restauración del orden y una verdadera venganza de clase contra trabajadores y pequeños empresarios. Se trataba de la primera ocasión en que militares y conservadores librecambistas «coincidían enteramente en el diagnóstico y la terapia: debían destruirse las bases del desorden, había que liquidar a la “Argentina maldita”, acabando para siempre con las insolencias de las identidades políticas y sociales de los sectores populares, sus sindicatos, sus servicios sociales y hasta buena parte de las fábricas en las que esa “plaga” tenía su fundamental apoyo. Se trataba en definitiva de refundar el *ethos* de la sociedad»<sup>7</sup>. Como observó Hugo Vezzetti, el *Proceso de Reorganización Nacional* «anunciaba desde la desmesura de esa denominación que no le bastaba intervenir sobre el Estado y las instituciones sino que la *Nación* misma debía ser objeto de una profunda reconstrucción»<sup>8</sup>.

La proclama que el 25 de marzo de 1976 se propagó a todo el país afirmaba que el golpe militar se había motivado en «un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía», «las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole» por el gobierno depuesto, su incapacidad para encaminar la economía y la falta de una estrategia global para «enfrentar a la subversión». Frente a ello, las Fuerzas Armadas «en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado». El *Acta* que fijó los *Objetivos básicos para el Proceso de Reorganización*

<sup>6</sup> MORRESI, S.: «La democracia de los muertos. Algunos apuntes sobre el liberalismo-conservador, el neoliberalismo y la ideología del Proceso de Reorganización Nacional», en *Actas (CD) de las XI Jornadas Interescuelas de Historia*, Tucumán, 19 al 21 de septiembre de 2007, pp. 8-9.

<sup>7</sup> PALERMO, V., y NOVARO, M.: *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 37; también, CANITROT, A.: «La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976», *Desarrollo Económico*, 76 (1980), pp. 457-475.

<sup>8</sup> VEZZETTI, H.: *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, p. 55.

*Nacional*, de ese mismo día, establecía como propósitos restablecer la «vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino, [...] vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia».

Si en muchos sentidos este discurso reproducía el de las intervenciones militares previas, en 1976, la ideología del golpismo se diferenció de las anteriores en el proyecto «de establecer un gobierno *de* las Fuerzas Armadas, y no meramente apoyado *por* ellas», a lo que se agregó la visión de la necesidad de producir un cambio profundo no sólo en el sistema político o la economía, sino que abarcara la sociedad argentina por completo<sup>9</sup>.

La reflexión académica de los últimos años ha comenzado a destacar que lejos de configurar un paréntesis en la historia, la dictadura instaurada en 1976 se ligaba a través de múltiples lazos con la experiencia histórica precedente de la sociedad argentina, y que «muchos de ellos se mantuvieron luego de su derrumbe, inclusive robustecidos»<sup>10</sup>. Es amplia la coincidencia en señalar que la dictadura pudo consumarse debido a que se articuló con una larga tradición de autoritarismo y de negación de los derechos del adversario político, cuyos elementos reorganizó y llevó a sus extremos. Si el despliegue de una violencia política creciente —de la que la datación de sus orígenes resulta aún hoy motivo de encendidas polémicas, y que, aunque sus manifestaciones se repitieron en la primera mitad del siglo XX, se radicalizó desde mediados de la década de 1950 al calor del enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas— y el carácter escasamente republicano y pluralista de las fuerzas políticas argentinas fueron algunos de los rasgos extremados por los golpistas de 1976, sin embargo «en su excepcional maldad, fueron criaturas de nuestra sociedad»<sup>11</sup>. Pilar Calveiro agregó a tal perspectiva la afirmación de que sólo pueden existir campos de concentración en sociedades que «eligen no ver», afirmando que en Argentina la previa admisión de la tortura contra los presos comunes y políticos y de la necesidad de exterminar a la subversión eran ampliamente difun-

---

<sup>9</sup> CAVAROZZI, M.: *Autoritarismo y democracia (1955-1966)*, Buenos Aires, CEAL, 1983, p. 75.

<sup>10</sup> ROMERO, L. A.: «Recuerdos del Proceso, imágenes de la Democracia: luces y sombras en las políticas de la memoria», *Clío & Asociados*, 7 (2003), pp. 113-124.

<sup>11</sup> ROMERO, L. A.: «Las raíces de la dictadura. La sociedad como cómplice, partícipe o responsable», *Los puentes de la memoria*, 3 (2001).

didos<sup>12</sup>. A la vez, se ha destacado que durante el tercer gobierno peronista la ley fue progresivamente dejada de lado por el Estado, que desplegó distintas formas de represión clandestina. La Masacre de Ezeiza, la acción terrorista de la paramilitar Alianza Anticomunista Argentina, la existencia de campos de detención clandestinos, los primeros casos de desaparición y el desarrollo de verdaderos golpes de Estado en dos provincias fueron algunos de sus ejemplos más notorios. Si desde esta perspectiva se aprecia cómo se agrava el carácter represivo del Estado, también resulta claro que la ininterrumpida sucesión de hechos excepcionales provoca que la excepción se convierta, velozmente, en la condición normal. Con ello queda claro, además, que la dicotomía democracia-dictadura, necesaria para dar cuenta de otros aspectos de la historia de la Argentina, se revela impotente para brindar un marco conceptual adecuado a estas dimensiones del proceso histórico<sup>13</sup>.

Desde el momento mismo de la toma del poder, el gobierno militar desarrolló una política represiva inusitadamente dura. Estableció el estado de sitio, prohibió la actividad política y sindical y se lanzó a una verdadera *caza del hombre* contra todo aquel que se considerara *subversivo*, concepto que en palabras del general Videla tenía un alcance vastísimo: «No es solamente matar militares. Es también todo tipo de enfrentamiento social»<sup>14</sup>. El *Proceso de Reorganización Nacional*, de tal modo, victimizó a una parte de la población y recibió el callado rechazo de diversos sectores. Sin embargo, no dejó de encontrar un significativo respaldo social. En efecto, mientras los grupos dominantes buscaron en 1976 dar prioridad al restablecimiento del monopolio de la coerción, la extrema fragmentación y anomia que caracterizaron al período anterior generaron en los grupos subordinados, y en concreto en los sectores medios, «una demanda primitiva de orden y una disposición generalizada a suscribir un pacto hobessiano o, por lo menos, a respaldar la adquisición energética de poder soberano por parte de dictadores»<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> CALVEIRO, P.: *Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina*, Buenos Aires, Colihue, 1998.

<sup>13</sup> PITTALUGA, R.: «La memoria según Trelew», *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, 19 (2008), pp. 81-111.

<sup>14</sup> *Gente*, 15 de abril de 1976.

<sup>15</sup> CORRADI, J.: «El método de destrucción. El terror en la Argentina», en QUIROGA, H., y TCACH, C. (comps.): *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*, Rosario, Homo Sapiens, 1996, p. 89.



Fue el contraste con los últimos años de gobierno democrático el que permitió a la dictadura construir cierta legitimidad inicial gracias al apoyo de una sociedad que suponía que ningún gobierno podría ser peor que el derrocado y otorgó al recién instalado un consenso «difuso y reactivo»<sup>16</sup>. En esta perspectiva resulta comprensible que amplios contingentes sociales depositaran su esperanza en un gobierno del que esperaban que lograra controlar la violencia política y solucionar la crisis económica. El gobierno militar había desalojado además a un régimen que extremaba algunos de los peores rasgos atribuidos al peronismo —desorden administrativo, ineficacia, discrecionalidad, autoritarismo— exacerbados por la acumulación de poder del exótico y sanguinario ministro de Bienestar Social, José López Rega, lo que sin duda contribuyó a ganar para la dictadura el apoyo de los sectores medios antiperonistas. De tal modo, ante el golpe de 1976, una parte considerable de la población manifestó, «pasiva y silenciosamente, su creencia en que la necesidad de recuperar un orden social dañado sólo se podría encontrar en el marco de la dominación militar»<sup>17</sup>. Sin embargo, el régimen militar de 1976 no se apoyó en la conquista de una nueva forma de legitimación, sino en la crisis de legitimidad del régimen civil precedente.

Aunque eran reducidos los grupos políticos y sectores sociales dispuestos a un acompañamiento activo del gobierno militar, un núcleo social minoritario pero influyente, y que conoció desde el comienzo los métodos represivos empleados, dio su pleno apoyo al régimen de facto. Buena parte de la jerarquía de la Iglesia católica de la Argentina —hegemonizada por los grupos tradicionalistas y moderados— no sólo prestó su conformidad al golpe de Estado, sino que los principales dignatarios eclesiásticos «fueron debidamente informados de los planes para derribar al régimen constitucional», incluido el método represivo que se emplearía. En esta perspectiva, se alcanzó un acuerdo según el cual «el régimen tendría vía libre en su acción represiva y contaría con el apoyo del Episcopado»<sup>18</sup>. En la cúpula eclesiástica confluyeron la voluntad de eliminar la amenaza política en el nivel

---

<sup>16</sup> PALERMO, V., y NOVARO, M.: *La dictadura militar...*, op. cit., p. 25.

<sup>17</sup> QUIROGA, H.: *El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*, Rosario, Fundación Ross, 1994, p. 36.

<sup>18</sup> MIGNONE, E.: *Iglesia y dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar*, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1986, p. 47.

nacional con la de retomar el control interno de la institución, cuestionado por múltiples signos de disidencia desplegados en los años previos, a través de una estrategia represiva delegativa. Sin embargo, en los momentos en que la represión alcanzó a miembros de la propia Iglesia católica se manifestaron tensiones entre el episcopado y el gobierno, que se manifestaron en reclamos formulados en reuniones privadas. Sólo pasado el momento más álgido de la represión, tras 1978, la jerarquía católica comenzaría un paulatino y muy tibio alejamiento respecto al régimen militar, que sólo se convirtió en denuncia abierta en la voz de contados obispos<sup>19</sup>.

Por su parte, las principales organizaciones que nucleaban a los grandes empresarios de la Argentina pueden ser catalogadas sin duda como sostenedoras y en muchos casos cómplices del terrorismo de Estado dictatorial. Son conocidos los casos extremos de empresas que convocaron a las Fuerzas Armadas a sus sedes y entregaron listas de los trabajadores que serían secuestrados, y en cuyas sedes se establecieron centros clandestinos de detención y tortura de prisioneros<sup>20</sup>. Aún en los últimos días de la dictadura, las organizaciones que nucleaban al gran capital demostraron su lealtad a los militares entonces caídos en desgracia tras la derrota en la guerra de las Malvinas, tal como manifestaron en una solicitada firmada, entre otros, por la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Consejo Empresario Argentino<sup>21</sup>. También la gran prensa de todo el país dio su apoyo casi unánime al nuevo régimen y, en buena medida, lo sostuvo hasta la crisis del gobierno militar<sup>22</sup>. Aun en el seno del movimiento obrero no dejó de emerger una línea dialoguista que se ofreció para asesorar a la intervención de la CGT. Una minoría de los dirigentes sindicales fue abiertamente cómplice de los crímenes de las fuerzas represivas, mientras la mayoría calló ante las persecuciones sufridas por los trabajadores<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> OBREGÓN, M.: *Entre la cruz y la espada*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2005.

<sup>20</sup> BASUALDO, V.: «Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmene Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz», *Engranajes*, FETIA-CTA suplemento especial, Buenos Aires, marzo de 2006.

<sup>21</sup> *Convicción*, 21 de septiembre de 1983.

<sup>22</sup> BLAUSTEIN, E., y ZUBIETA, M.: *Decíamos ayer: la prensa argentina bajo el Proceso*, Buenos Aires, Colihue, 1988.

<sup>23</sup> POZZI, P.: *Oposición obrera a la dictadura (1976-1982)*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988, pp. 114-115. Para la actitud de otras organizaciones e instituciones pue-

Otros sectores consintieron la represión ilegal entendiendo que era típica de las dictaduras militares, mostrándose dispuestos a aceptar restricciones pasajeras a las libertades. La modalidad de la represión, a la vez visible e invisible, oficial y clandestina, determinó que las personas pudieran dar cuenta de la situación con un «amplio margen para construir su interpretación y para “decidir” ver o no ver, saber o no saber, entender o no entender»<sup>24</sup>. Aunque resulta imposible dar cuenta acabadamente de tal disposición, algunos testimonios de la época permiten documentarla. En mayo de 1976 el periodista James Nielson afirmaba en *Buenos Aires Herald* que «muchas personas, por lo demás respetables, creen que los izquierdistas, sean activistas tira-bombas o idealistas transmundanos, merecen la pena de muerte. No exigen que eso se inscriba en el código penal pero sí aceptan la muerte violenta de izquierdistas con total ecuanimidad»<sup>25</sup>.

A la vez, las mismas características de la represión dificultaban las posibilidades de comprender su extensión y profundidad. Resulta muy significativo al respecto que hasta una organización de izquierda y decididamente hostil al régimen, como el Partido Socialista de los Trabajadores —del que al menos un centenar de sus militantes fue asesinado por la acción de la Alianza Anticomunista Argentina primero y luego del régimen militar—, no sólo reconociera en mayo de 1976 que el régimen de Videla contaba con un «apoyo superfluo» debido al «repudio ganado por el gobierno anterior o la retracción y confusión de los sectores populares», sino que considerara que la existencia de secuestros y desapariciones era atribuible a «bandas de extrema derecha» y no al gobierno, del que se esperaba que desmascarara a esos «grupos sin autor esclarecido»<sup>26</sup>.

---

den consultarse, entre otros, GROISMAN, E.: *La Corte Suprema durante la dictadura*, Buenos Aires, CISEA, 1987; KLICH, I.: «Políticas comunitarias durante las Juntas Militares argentinas: la DAIA durante el Proceso de Reorganización Nacional», en SENKMAN, L.: *El antisemitismo en la Argentina*, Buenos Aires, CEAL, 1989, y KAUFMANN, C. (comp.): *Dictadura y Educación*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2001.

<sup>24</sup> PALERMO, V., y NOVARO, M.: *La dictadura militar...*, op. cit., pp. 132-133.

<sup>25</sup> NEILSON, J.: *En tiempos de oscuridad, 1976-1983*, Buenos Aires, Emecé, 2001, p. 15.

<sup>26</sup> *Cambio*, Buenos Aires, núm. 1, primer quincena de mayo de 1976, pp. 3 y 16.

## Partidos políticos, organizaciones sociales y dictadura militar

Considerando el régimen político argentino en el largo plazo, Hugo Quiroga ha afirmado que la discontinuidad institucional iniciada con el golpe de Estado de 1930 no puede ser tomada como una ruptura del sistema político. Por el contrario, tal sistema funcionó durante medio siglo a través de una articulación que combinó en su estructura los gobiernos militares con los gobiernos civiles. De tal modo, la sociedad organizó un sistema político carente de continuidad institucional, en el que la presencia del poder militar se convirtió en una constante. De hecho, desde 1930, las Fuerzas Armadas se constituyeron como un componente complementario en el funcionamiento del sistema político argentino. De tal modo, más que dos sistemas, existieron dos polos antagónicos, el democrático y el autoritario, coexistiendo en el interior de un mismo sistema político, que toleró una alternancia del poder entre las fuerzas civiles y militares, que no siempre se enfrentaron y muchas veces se presentaron como aliadas<sup>27</sup>. Las Fuerzas Armadas compitieron así por el poder en la vida pública frente a los partidos políticos, como una fuerza política estatal. En consecuencia, lo que legitimó la dominación militar fue el funcionamiento de un «*sistema político* particular que incorporó en su interior a las Fuerzas Armadas como un componente esencial y permanente. En otras palabras, *el sistema político opera como modo de legitimación de la dominación militar*. La “pretorianización” del sistema político ha incidido en la conformación de una *cultura política* particular entre los argentinos»<sup>28</sup>.

Dadas tales características, no resulta sorprendente que mientras los partidos políticos conservadores otorgaron su total apoyo al gobierno militar, la Unión Cívica Radical manifestara en marzo de 1976 su postura de abrir un compás de espera ante la nueva situación, mientras el derrocado Partido Justicialista reconocía la necesidad de buscar una salida conjunta con las Fuerzas Armadas. Quiroga es terminante al momento de señalar que, desde 1976, la intervención militar fue legitimada por la casi totalidad de las formaciones políticas mediante el reconocimiento del papel de las Fuerza Armadas en la

---

<sup>27</sup> QUIROGA, H.: *El tiempo del proceso...*, op. cit., pp. 21-22.

<sup>28</sup> *Ibid.*, p. 39.

«lucha contra la subversión», ya que «ésa fue la legitimidad de origen permanentemente invocada por la administración de facto»<sup>29</sup>. Tales actitudes, en la óptica de Quiroga, no fueron sólo patrimonio de los partidos políticos: «La falta de fidelidad es también imputable a la mayoría de los ciudadanos que buscan, en la dominación militar, fórmulas alternativas de legitimidad»<sup>30</sup>.

Quiroga ha destacado que un conjunto de partidos políticos —el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Socialista Democrático, el Partido Demócrata Progresista y una constelación de agrupaciones conservadoras provinciales— se mostró *desleal* al sistema democrático, ofreciendo su apoyo y las competencias individuales de sus miembros para integrarse en la conducción del gobierno. En contraste, los dos grandes partidos políticos argentinos tuvieron en el periodo una actitud *semileal*. En una perspectiva similar, César Tcach ha distinguido —apelando a los criterios de Biescas y Tuñón de Lara— entre partidos situados *dentro del régimen* y *fuera del régimen*<sup>31</sup>. Tal distinción se funda en dos aspectos: la contribución a la formación de elencos de gobierno y la incidencia en la elaboración y ejecución de las políticas públicas. Las afirmaciones de ambos autores son certeras si se atiende a los principales cargos ministeriales, pero sin embargo, otras funciones estatales —como las de embajadores, ministros provinciales o intendentes municipales— fueron asumidas, a título individual, por afiliados al radicalismo y al justicialismo.

En efecto, una buena parte de los intendentes que desarrollaron sus funciones durante el *Proceso de Reorganización Nacional* fue civil. Un informe de la Secretaría de Informaciones del Estado revelaba que de 1.697 municipios, sólo 170, es decir el 10 por 100, tenía intendentes militares. 649 intendentes (38 por 100) eran civiles sin militancia política. Los 878 intendentes restantes (52 por 100) en todo el

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 492. A conclusiones similares ha llegado YANUZZI, M. A.: *Política y Dictadura*, Rosario, Fundación Ross, 1996. Una perspectiva similar ha sido retomada por PUCCIARELLI, A.: «La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa», en PUCCIARELLI, A. (comp.): *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, siglo XXI, 2004.

<sup>30</sup> QUIROGA, H.: *El tiempo del proceso...*, *op. cit.*, p. 492.

<sup>31</sup> TCACH, C.: «Radicalismo y dictadura (1976-1983)», en QUIROGA, H., y TCAHC, C. (comps.): *A veinte años del golpe...*, *op. cit.*, p. 34. El criterio está tomado de BIESCAS, J., y TUÑÓN DE LARA, M.: *España bajo la dictadura franquista (1939-1975)*, Madrid, Labor, 1981.

país provenían de los partidos tradicionales, según el siguiente detalle: Unión Cívica Radical, 310; Partido Justicialista y otros afines, 192; Partido Demócrata Progresista, 109; Movimiento de Integración y Desarrollo, 94; Fuerza Federalista Popular, 78; Partido Demócrata Cristiano, 16; Partido Intransigente, 4<sup>32</sup>. En julio de 1981, cuando la dictadura comenzaba a mostrar signos de agotamiento, el Comité de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical condenó la designación de intendentes civiles, destacó que pocos radicales habían aceptado esa invitación y reclamó la renuncia de los que lo habían hecho<sup>33</sup>.

El régimen militar desarrolló una serie de estrategias para obtener el apoyo popular. El *Plan de Acción psicológica* del ejército planteaba la utilización de diversos instrumentos propagandísticos para lograr la adhesión popular en la llamada «guerra contra la subversión»<sup>34</sup>. El desarrollo de campañas en los medios de comunicación, la recusación en tono nacionalista de las denuncias internacionales de las violaciones a los Derechos Humanos como una «campaña antiargentina» o el aprovechamiento de los éxitos deportivos de 1978 y 1979 se cuentan entre las herramientas que empleó la dictadura.

Se trató, sin embargo, de un régimen que —contrario a las estrategias movilizadoras— encontró múltiples dificultades para organizar un principio de legitimidad estable<sup>35</sup>. Desde una perspectiva estructural, debido a que, aunque hayan existido convocatorias a la participación, la eliminación de la ciudadanía implicó que ésta sólo haya podido asumir la forma de una «aprobatoria contemplación de las tareas que emprenden las instituciones estatales. En estas condiciones, a lo más que se puede aspirar es al “consenso tácito”. Es decir, despolitización, apatía y refugio en una cotidianeidad altamente privatizada»<sup>36</sup>.

Las políticas económicas de Martínez de Hoz y sus sucesores minaban a la vez el terreno para encontrar principios de legitimidad

<sup>32</sup> *La Nación*, 25 de marzo de 1979.

<sup>33</sup> TCACH, C.: «Radicalismo...», *op. cit.*, p. 38.

<sup>34</sup> VAZQUEZ, E.: *PRN. La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, Buenos Aires, Eudeba, 1985, pp. 264-269.

<sup>35</sup> LVOVICH, D.: «Dictadura y consenso ¿Qué podemos saber?», *Los Puentes de la Memoria*, 17 (2006).

<sup>36</sup> O'DONNELL, G.: «Tensiones en el estado burocrático-autoritario y la cuestión de la democracia», *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Buenos Aires, Paidós, 1997, p. 73.

suficiente en los planos económico y social, contrastando con otras dictaduras latinoamericanas. Durante su gestión (1976-1981) se produjo un viraje en el eje de valorización del capital, que pasó del sector industrial al financiero, trayendo como consecuencia la destrucción de una parte considerable del tejido industrial y una marcada concentración y centralización del capital en todos los sectores económicos. La política económica de Martínez de Hoz se sostuvo en tres pilares: el ajuste de los precios domésticos —en especial de los salarios— desde el comienzo de su gestión, una reforma del sistema financiero puesta en marcha desde 1977 y una abrupta apertura comercial desde 1978. El conjunto de estas medidas liberalizadoras, sumadas a la sobrevaluación del peso, tuvo como consecuencia una marcada vulnerabilidad externa, un altísimo endeudamiento y una constante transferencia de recursos hacia el exterior<sup>37</sup>. Estas políticas condujeron a un acentuado deterioro de los ingresos y condiciones de vida de los trabajadores y afectaron profundamente a los pequeños y medianos empresarios, muchos de los cuales perdieron su condición de tales. La situación no haría más que agravarse con la salida devaluadora implementada en 1981 por el ministro de Economía Sigaut, ya bajo la presidencia del general Viola. El Estado socorrió al sector financiero en crisis y se hizo cargo de parte de las deudas contraídas por los empresarios privados, incrementando el déficit fiscal y el endeudamiento público, provocando un nuevo proceso inflacionario y deteriorando las condiciones de vida de vastísimas franjas de la población. Ya bajo la presidencia del general Galtieri, en 1982, el ministro de Economía Roberto Alemann regresó a un plan económico ortodoxo: aumentos de tarifas e impuestos, congelación de sueldos, liberalización del mercado cambiario y objetivos de privatización masiva de empresas públicas. El estallido de la guerra de las Malvinas y la crisis del régimen tras la derrota militar tornarían insostenible este plan.

Desde los primeros años del régimen militar, las políticas económicas serían objeto de críticas hasta por parte de sectores que brindaban su más amplio apoyo a la dictadura en el terreno político. En años sucesivos se hicieron sentir con potencia los efectos más corrosivos de

---

<sup>37</sup> CASTELLANI, A.: «Gestión económica liberal-corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar», en PUCIARELLI, A. (coord.): *Empresarios, tecnócratas y militares: la trama corporativa de la última dictadura*, Lima, Siglo XXI, 2004, *op. cit.*, pp. 179-181.

las políticas económicas del régimen, que despertaron distintas formas de protesta por parte de los trabajadores asalariados, incluyendo dos huelgas generales, en 1979 y en 1981<sup>38</sup>. A diferencia de otros regímenes dictatoriales latinoamericanos —como los de Chile o Brasil—, el *Proceso* argentino no generó políticas económicas capaces de lograr el apoyo duradero de sectores amplios de la población. Sin embargo, carecemos hasta hoy de estudios académicos —existen en cambio testimonios literarios y cinematográficos— que den cuenta del modo en que otros aspectos de esas políticas, como la sobrevaluación del peso y las posibilidades de ampliación del consumo que ella posibilitó en sectores medios y altos, fortalecieron las bases de sustentación del gobierno militar.

Contribuyó a las dificultades del régimen para encontrar principios de legitimidad estables la coexistencia en el interior del gobierno de dos sectores. Los núcleos denominados *politicistas* del gobierno, nucleados en la Secretaría General de la Presidencia, proponían el restablecimiento a medio plazo de un régimen democrático restringido y tutelado por las Fuerzas Armadas, en un sistema político reorganizado en el que predominara un partido político heredero del *Proceso*. Los sectores más duros del régimen, encabezados por los responsables de los Cuerpos del Ejército y el ministro de Planeamiento, sustentaban en cambio un proyecto que recogía muchos de los rasgos corporativistas que se habían experimentado bajo el gobierno del general Onganía (1966-1970)<sup>39</sup>. Estas tensiones determinaron en buena medida los límites de una estrategia de convocatoria a la civilidad, dado el desacuerdo acerca de los cauces de representación que esta debía asumir. Este dilema tendría un alcance tal que no sería hasta marzo de 1980, sobre el final de la presidencia de Videla, cuando el régimen logre implementar el diálogo con partidos políticos y organizaciones sociales.

<sup>38</sup> Entre la relativamente abundante literatura dedicada al estudio de los trabajadores durante el período dictatorial se destacan: POZZI, P.: *Oposición obrera...*, *op. cit.*; FALCÓN, R.: «La resistencia obrera a la dictadura», en QUIROGA, H., y TCACH, C. (comps): *A veinte años del golpe...*, *op. cit.*; DICOSIMO, D.: «Dirigentes sindicales, racionalización y conflictos durante la última dictadura militar», *Entrepasados*, 29 (2006); y LORENZ, F.: *Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del setenta*, Buenos Aires, Norma, 2007.

<sup>39</sup> CANELO, P.: «La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981)», en PUCCIARELLI, A. (coord.): *Empresarios, tecnócratas y militares...*, *op. cit.*, pp. 266-270.



Desde el momento del golpe de Estado de 1976, y mientras se elaboraba una fórmula aceptable para las distintas alas del gobierno, el régimen militar desarrolló la estrategia de ampliar las bases de sustentación y de generación de consenso a partir de los municipios, no sólo teniendo en cuenta los cuadros de gobierno, sino también intentando obtener el apoyo de las instituciones vecinales, fomentistas, culturales y deportivas, a nivel local<sup>40</sup>.

El reconocimiento de la existencia de dos alas en el régimen tuvo efectos inesperados sobre su legitimación. Distintas expresiones políticas, incluido el Partido Comunista Argentino, consideraron la necesidad de apoyar a los sectores que caracterizaban como democráticos para evitar el ascenso al poder de los «pinochetistas» y de plantear la posibilidad de una convergencia cívico militar que los incluyera<sup>41</sup>.

Avanzado el periodo dictatorial, y pese a que los partidos políticos abandonaron su letargo, la oposición se mostró muy limitada, ya que las principales organizaciones civiles no buscaron una salida autónoma de las Fuerzas Armadas. Desde 1978 prevalecieron el cuestionamiento al monopolio de la política por el Estado autoritario, el reclamo por el establecimiento de formas de diálogo y participación política y por el restablecimiento del Estado de Derecho, así como se hicieron escuchar voces cada vez más críticas hacia la política económica. En algunos partidos políticos, la elevación del tono de la crítica estuvo motivada en el temor de que el régimen intentara fraccionarlos para incorporar a los sectores más conservadores a un agrupamiento oficialista.

Sin embargo, estas formas de distanciamiento eran limitadas ya que «en todos los textos se reconoce igualmente el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión, y en ninguno de ellos aparece la idea de conformar un polo cívico de oposición antidictatorial». De tal modo, «la tensión entre democracia y dictadura no estaba

---

<sup>40</sup> LVOVICH, D.: «Micropolítica de la dictadura: Poder municipal y asociacionismo local, entre la aceptación y el distanciamiento», en SOPRANO, G., y BOHOSLAVSKY, E. (comps): *Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (de 1880 a la actualidad)*, Buenos Aires, UNGS, 2009.

<sup>41</sup> CAMPIONE, D.: «Hacia la convergencia cívico-militar. El Partido Comunista 1955-1976», *Herramienta*, 29 (2005). Otros autores enfatizan el peso de las relaciones comerciales entre Argentina y la Unión Soviética para explicar las posturas del PCA; cfr. RAPOPORT, M.: «La Posición Internacional de la Argentina y las Relaciones Argentino-Soviéticas», en PERINA, M., y RUSSELL, R. (eds.): *Argentina en el Mundo (1973-1987)*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988.

abiertamente planteada en la Argentina de 1978»<sup>42</sup>. Ese mismo año, más de trescientas asociaciones civiles habían desarrollado una campaña contra «aquellos que pretenden distorsionar la imagen del país en el exterior» a través de solicitadas firmadas entre otros por la Universidad Católica Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el Club Alemán y el grueso de las entidades patronales<sup>43</sup>.

En 1979, la presencia en la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tornó inocultables los efectos de la política represiva del régimen. Sólo los organismos de Derechos Humanos y ciertos partidos de izquierda se mostraron decididamente opuestos a la represión militar. Los partidos conservadores y las organizaciones patronales dieron su pleno apoyo a lo actuado por las Fuerzas Armadas, mientras la mayor parte del episcopado, la cúpula del radicalismo y sectores del peronismo, aunque no cuestionaron la represión, denunciaban sus «excesos». El reconocimiento de la guerra antisubversiva —principal principio de legitimación del gobierno de facto— se mantenía inalterable<sup>44</sup>.

Tal característica se mantuvo hasta el final del régimen. Cuando en 1981 los principales partidos políticos —Radical, Peronista, Intransigente, Demócrata Cristiano y Desarrollista— se aliaron en la *Multi-partidaria*, ésta —hegemonizada por los sectores más moderados— no actuó como una alianza antiautoritaria, de oposición frontal al régimen militar, sino como una herramienta de negociación que reclamaba el retorno a la democracia en un momento de flexibilización política. De tal modo, y tras la guerra de las Malvinas, el derrumbe del orden autoritario fue el resultado más de su propia ineptitud política que de las movilizaciones sociales.

Continuaba sin embargo, como sostiene el propio Quiroga, un tema silenciado. Cuando en junio de 1982 la Multipartidaria publicó un documento titulado *Programa para la Reconstrucción Nacional* en

<sup>42</sup> QUIROGA, H.: *El tiempo del proceso...*, op. cit., p. 164.

<sup>43</sup> ARMONY, A.: «Mejor no hablar de ciertas cosas. Responsabilidad social y terrorismo de estado en Argentina», *Textos para pensar la realidad*, núm. 6, año 3, p. 16.

<sup>44</sup> QUIROGA, H.: *El tiempo del proceso...*, op. cit., pp. 203-204. Por supuesto, cada uno de los partidos fue el escenario de pujas internas entre sus principales dirigentes que permitirían matizar estas posturas. Las investigaciones sobre la vida interna de las organizaciones partidarias, el funcionamiento de los partidos políticos en la clandestinidad y la experiencia de las bases partidarias en la dictadura se encuentran aún en un estado muy inicial, que no permite arrojar conclusiones.

el que se reclamaba un cronograma político, se señalaba el agotamiento del régimen militar y se rechazaba la política neoliberal, no se hicieron referencias a la situación de los Derechos Humanos en la Argentina.

Sin embargo, la problemática del terrorismo de Estado y sus consecuencias no tardaría en convertirse en un tema central de la transición, una vez que, eliminada la censura, la voz de los Organismos de Derechos Humanos se hiciera sentir con potencia y desde los medios de comunicación se desplegara un verdadero *Show del Horror* dictatorial.

El régimen autoritario en desintegración intentó obtener una salida negociada en noviembre de 1982, que fue ampliamente rechazada por los partidos políticos y buena parte de la sociedad, a través de una masiva marcha en defensa de la democracia, a consecuencia de la cual el gobierno fijó la fecha para las elecciones. En abril de 1983, el gobierno emitió el *Documento final de la Junta Militar*; en él se fijaban los puntos básicos de negociación para la transición, que fue nuevamente rechazado, en particular en lo relativo a la pretensión de las Fuerzas Armadas de no dar cuenta de sus responsabilidades por lo que llamaba «excesos en la guerra sucia» y de definir su inserción en el futuro gobierno civil. En un mismo sentido, la ley de autoamnistía que establecía la extinción de las acciones penales «emergentes de delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982» fue impugnada por inconstitucional por la Multipartidaria. La intensa movilización de la sociedad, en consonancia con la propia debilidad de las Fuerzas Armadas, sumidas en hondos conflictos internos, es la más firme explicación para el fracaso de un pacto entre la dirección política y los militares que implicara correr el telón sobre el pasado y asegurara una transición negociada del régimen de facto al democrático<sup>45</sup>.

Si la transición no se alcanzó a través de un pacto, tampoco hubo «una ruptura total con el régimen anterior. Algunos de los elementos del antiguo régimen van a continuar en el nuevo orden político. Y es aquí donde revela interés la hipótesis de «pacto postergado», de un pacto diferido en el tiempo, que crea una situación no clausurada, sino más bien suspendida»<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> ROMERO, L. A.: *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

<sup>46</sup> QUIROGA, H.: *El tiempo del proceso...*, op. cit., p. 331.

Los efectos de esta situación se harían sentir, intermitentemente, a lo largo del cuarto de siglo que siguió al fin de la dictadura.

### **La sociedad bajo la dictadura: de resistencias y microdespotismos**

Si mirada desde los partidos políticos y organizaciones sociales es posible concluir que buena parte de la sociedad dio su respaldo —con distintos matices— a las premisas fundamentales en que se sustentaba la dictadura, el desarrollo de una mirada «desde abajo» resulta mucho más dificultosa. No se puede olvidar en el momento de intentar trazar un cuadro al respecto la existencia de censura, ni las orientaciones que se divulgaban desde los partidos políticos, Iglesias y organizaciones sociales, ni de la amenaza del terror estatal. También se debe tener presente que, como sostiene Vezzetti, toda pregunta por la responsabilidad de la *gente corriente* en situaciones extremas implica referirse, en primer lugar, a aquellos que los pusieron en esa situación.

Una mirada impresionista podría optar por detenerse en algunas imágenes que den cuenta de esas actitudes sociales, tan difíciles de captar y reducir a una fórmula sencilla. Se podría así evaluar el impacto de las interpelaciones gubernamentales denunciando la «campaña antiargentina» considerando la extraordinaria aceptación del lema «Los argentinos somos derechos y humanos», adherido en calcomanías en parabrisas y ventanas. Pero también se podría, en contraste, apelar a las movilizaciones sindicales que desde 1981 ocuparon las calles de las ciudades, por ejemplo la del 30 de marzo de 1982, sólo dos días antes del desembarco argentino en Malvinas, que resultó severamente reprimida; o a la gran cantidad de lectores de la revista *Humor*, que a partir del lenguaje satírico se constituyó desde 1978 en uno de los referentes de la oposición —primero cultural y luego política— al régimen.

También sería posible intentar descifrar los sentidos de las masivas movilizaciones callejeras, en las que no faltaron las expresiones de respaldo al régimen militar, desarrolladas en ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 o en los días iniciales de la guerra de las Malvinas; o el significado que para sus protagonistas tuvieron las multitudinarias peregrinaciones católicas que se multiplicaron desde

1976<sup>47</sup>. O bien se podría optar por concentrarse en la imagen de la multitud que festejaba en las calles el triunfo del seleccionado argentino en el Campeonato Mundial Juvenil de fútbol de Japón de 1979, que incitada por un periodista radial, se manifestó frente a la sede de la OEA, donde se hallaba la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se encontraron con una fila de centenares de personas, que esperaban para presentar sus denuncias por la desaparición de sus familiares, momento en que «dos rostros del país se miraron a los ojos y a partir de allí ya nada volvería a ser igual»<sup>48</sup>.

Sin embargo, estos recursos serían necesariamente insuficientes, dadas las dificultades para interpretar las motivaciones de los actores en cada una de esas situaciones. Las vías elegidas para intentar explicar las actitudes de la población fueron otras. Algunos estudios subrayaron la capacidad del terror estatal para eliminar cualquier forma de resistencia, oposición o disidencia<sup>49</sup>. Otros trabajos que analizaron la lógica del terror no dejaron de señalar su carácter productor de sujetos políticos que obedecen «absoluta pero voluntariamente»<sup>50</sup>. Una tercera mirada señala que el temor o la complicidad social no aparecen como actitudes unívocas, al explicar las conductas como «extrañas combinaciones de formas de obediencia y formas de rebelión»<sup>51</sup>.

Esta perspectiva permite dar cuenta de la complejidad del fenómeno, y se puede vincular a las observaciones que señalan las dificultades para emplear la noción de consenso, por considerar que define la relación existente entre gobernantes y gobernados en regímenes que permiten la libre expresión de la voluntad individual y social, y no en los caracterizados por la preeminencia del aparato represivo, el monopolio político y la censura<sup>52</sup>. En tal sentido, resulta altamente

---

<sup>47</sup> LIDA, M.: «Movilizaciones católicas en tiempos de represión y dictadura. Sociedad, régimen militar e iglesia Católica en la Argentina, 1976-1982», <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/miranda1.pdf>.

<sup>48</sup> VERBISTSKY, H.: *Malvinas. La última batalla de la tercera guerra mundial*, Buenos Aires, Sudamericana, p. 112.

<sup>49</sup> ACUÑA, C., y SMULOVITZ, C. H.: «Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional», en ACUÑA, C., et al.: *Juicio, castigos y memorias. Derechos Humanos y justicia en la política argentina*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

<sup>50</sup> CORRADI, J.: «El método de destrucción...», *op. cit.*

<sup>51</sup> CALVEIRO, P.: *Poder y desaparición. Los campos de concentración en la Argentina*, Buenos Aires, Colihue, 1998, p. 158.

<sup>52</sup> Una buena síntesis sobre el debate en torno a la noción de consenso social se

improbable que el historiador logre diferenciar el consenso tácito que supone aprobación de las prácticas estatales, de la aceptación pasiva de sus políticas debido al terror o la resignación fundada en la falta de expectativas razonables de cambio. De modo que la falta de manifestaciones de oposición o resistencia no puede ser sencillamente equiparada a un consenso tácito motivado en la aprobación de las políticas del régimen. Por otra parte, dificultades similares pueden ocurrir con el análisis de determinadas formas de disenso, oposición o resistencia a las dictaduras, de las que rara vez queda registro y de las que la sutileza de sus señales e indicios las torna casi inaprensibles, ya que estas prácticas rara vez producen acciones colectivas, pero pueden minar el consenso de un modo difícil de reprimir<sup>53</sup>.

Ha sido señalado que los modos más activos de consenso y las formas que asumió la complicidad, resultan claramente identificables sobre todo en los casos de personas con una activa participación pública y de instituciones. En cambio, en relación con las percepciones de los actores individuales, Philippe Burrin ha sostenido que el término consenso simplifica la complejidad de las actitudes hacia el poder, que habría que situar en una escala en torno a dos nociones; la aceptación y el distanciamiento. La primera comprendería la resignación, el apoyo y la adhesión; la segunda, la desviación, la disidencia y la oposición. Lo más común y frecuente en la realidad es encontrar en un mismo individuo una mezcla de varias de estas actitudes<sup>54</sup>.

Si muchos trabajos académicos se concentraron en las actitudes de oposición y disidencia, otros dieron cuenta del apoyo y la adhesión a las prácticas dictatoriales. Particularmente relevante al respecto resulta la aportación de dos investigadores, que a su prestigio suman la condición de haber sido agudos observadores contemporáneos de la sociedad argentina en condiciones de dictadura.

Uno de ellos, Guillermo O'Donnell, realizó en los primeros años de la dictadura una investigación —informal y poco sistemática, dadas

---

expone en CALVO VICENTE, C.: «El concepto de consenso y su aplicación al estudio del régimen franquista», *Spagna Contemporánea*, 7 (1995). Al respecto véase también PAINTER, B.: «Renzo De Felice and the Historiography of Italian Fascist», *The American Historical Review*, 95 (2) (1990).

<sup>53</sup> Cfr. TARROW, S.: *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza, 1997, pp. 168-169.

<sup>54</sup> BURRIN, Ph.: «Politique et société: les structures du pouvoir dans l'Italie fasciste et l'Allemagne nazi», *Annales ESC*, 43, 3 (1988), p. 625.

las condiciones imperantes—en la que encontró un alto nivel de adhesión a los mensajes de la dictadura entre las personas entrevistadas que, sin embargo, negarían haber asumido alguna vez tales posiciones al reiterarse las entrevistas tras la guerra de las Malvinas<sup>55</sup>. O'Donnell sostiene que el control dictatorial sobre la sociedad sólo se pudo desarrollar por la existencia de «una sociedad que se patrulló a sí misma», refiriéndose a un grupo amplio de personas que voluntariamente «se ocuparon activa y celosamente de ejercer su propio *pathos* autoritario. Fueron *kapos* a los que, asumiendo los valores de su (negado) agresor, muchas veces los vemos yendo más allá de lo que el régimen les demandaba»<sup>56</sup>.

El segundo, Hugo Vezzetti, dirigió su mirada a la conducta de la «gente corriente» durante la dictadura, señalando que la argentina fue una sociedad más prudente que aterrorizada, con una disposición flexible hacia el régimen militar, presente tanto en los sectores empresariales, eclesiásticos y políticos que obtenían beneficios tangibles de la dictadura, como en las extensas capas medias que disfrutaban de la sobrevaluación del peso. Se trataba en su óptica de una sociedad que, en su amplia mayoría, «compartía, aunque fuera por una relación delegativa con los guerreros, la visión básica de un antagonismo que sólo podría resolverse por la aniquilación del enemigo»<sup>57</sup>.

En tal sentido, Vezzetti sostiene que la imagen de una sociedad «mayoritaria y permanentemente aterrorizada frente a una violencia extendida en la vida cotidiana» es el resultado de una construcción retrospectiva alimentada por el viraje «hacia un ánimo opositor cuando la dictadura estaba ya derrotada»<sup>58</sup>. El punto de inflexión en la percepción de la dictadura resultó la derrota en la guerra de las Malvinas, que «arrastró un decisivo cambio en la significación de la otra guerra, contra la *subversión*, que perdió todo consenso en la sociedad». Por estas causas, el autor postula que «una exploración que se pregunte cómo fue posible el terrorismo de Estado debe ser ampliada a lo que sucedió en la sociedad, en sus organizaciones y sus diri-

<sup>55</sup> O'DONNELL, G.: «Sobre las fructíferas convergencias de las obras de Hirschman, *Salida, voz y lealtad* y *Compromisos cambiantes*: reflexiones a partir de la experiencia argentina reciente», *Contrapuntos...*, *op. cit.*, p. 151.

<sup>56</sup> O'DONNELL, G.: «Democracia en la Argentina. Micro y macro», en *Contrapuntos...*, *op. cit.*, pp. 137-138.

<sup>57</sup> VEZZETTI, H.: *Pasado y presente...*, *op. cit.*, p. 67.

<sup>58</sup> *Ibid.*, p. 43.

gentes»<sup>59</sup>. La problemática involucra, además, a aquellos que tuvieron una participación subordinada en funciones menores dentro del aparato estatal, en las Fuerzas Armadas y de seguridad y en instituciones públicas diversas, ya que se debe considerar el rol «cumplido en muchos casos voluntariamente, por los niveles más bajos de perpetradores y otros colaboradores, algunos forzados por la pertenencia a las instituciones involucradas en la represión, otros más libremente dispuestos a brindar su apoyo mediante la delación o la proclamada adhesión y la difusión del discurso del régimen»<sup>60</sup>.

Ambas miradas abordan aspectos sombríos de la vida social, aunque el tipo de perspectiva asumida no permita dar cuenta de algunas preguntas centrales: ¿Quiénes formaban esos grupos? ¿Cuáles eran sus adscripciones de clase, sus identidades políticas, su distribución regional? ¿Cuál era su proporción en la población?

Investigaciones recientes intentan dar cuenta de estas preguntas desde perspectivas microanalíticas o de historia local<sup>61</sup>. En ellas se concluye que si en ocasiones el apoyo o adhesión al régimen surgió de un entusiasmo militante con sus políticas, postura que se generó en redes de sociabilidad política previamente existentes, en otras se debe buscar la explicación en dimensiones no expresamente políticas e ideológicas. Así, para el caso de las burocracias provinciales y municipales se ha constatado que buena parte de los cargos directivos fue ocupada por personas que, sin adscribirse al régimen, encontraron en el contexto dictatorial una oportunidad de ascenso laboral. En tal sentido, las regularidades de la vida burocrática y las pequeñas ambiciones personales incidieron sobre la decisión de asumir cargos públicos en un contexto de dictadura, posibilitando así el funcionamiento efectivo de las instituciones estatales de distinta importancia y nivel.

Aunque la historiografía de la dictadura militar está todavía en un estadio muy inicial de desarrollo, y sólo muy recientemente ha alcan-

<sup>59</sup> *Ibid.*, p. 40.

<sup>60</sup> *Ibid.*, pp. 48-49.

<sup>61</sup> LVOVICH, D.: «Micropolítica...», *op. cit.*; y RODRÍGUEZ, L.: «Gobierno municipal, descentralización educativa y funcionarios en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar», en SOPRANO, G., y BOHOSLAVSKY, E. (comps.): *Funcionarios e instituciones...*, *op. cit.* El primer estudio regional de envergadura sobre la dictadura y su implantación social es AGUILA, G.: *Dictadura, represión y sociedad en Rosario (1976/1983). Un estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura*, Buenos Aires, Prometeo, 2008.



zado plena legitimidad académica en la Argentina, la evidencia acumulada permite sostener que la dictadura militar instaurada en 1976 dista tanto de resultar un paréntesis inexplicable que no se articula con el desarrollo histórico nacional, como de ser un régimen carente por completo de apoyos sociales y políticos. Por el contrario, el régimen militar comienza a ser concebido por el *mainstream* historiográfico como un fenómeno articulado con una larga tradición de autoritarismo y negación de los derechos del adversario y como la culminación del fenómeno de naturalización de la violencia y la represión.

Una similar naturalización de las intervenciones militares otorgó legitimidad a la dictadura de 1976 ante los ojos de buena parte de la dirección política que, hasta muy avanzado el *Proceso*, manifestó su acuerdo con los fundamentos del régimen, pese a manifestar su oposición a algunas de sus políticas específicas. Entre el terror y el consentimiento, buena parte de la sociedad argentina desplegó actitudes sociales que no se diferenciaron de las de sus dirigentes políticos, sociales y religiosos, generando así las condiciones para que la dictadura se desarrollara. Aunque la memoria predominante en nuestros días no lo pueda recordar, el régimen instaurado en 1976 distó de estar siempre aislado y de carecer de bases sociales y políticas de sustentación. Ello no implica, por supuesto, que el régimen militar hubiera contado con apoyos masivos y entusiastas de manera permanente, pero la imagen del periodo que comienza a delinear la historiografía permite pensar en paisajes mucho más matizados, en los que las actitudes de aceptación y distanciamiento se combinan para dar una idea más acabada de la sociedad en el periodo dictatorial.